

EE UU y la redemocratización de Chile

Sergio Bitar

Agradezco la invitación del *Washington Office on Latin America* y el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown para participar en esa conferencia sobre la redemocratización del cono sur. Agradezco también la oportunidad de expresar mi pensamiento al Congreso de los EE UU. Como latinoamericano reconozco el valor de las posiciones asumidas por miembros de este Congreso en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el principio de no intervención en los asuntos internos de América Latina. Como chileno reconozco la importancia de las investigaciones realizadas por el Congreso de EE UU sobre la intervención de la administración Nixon y de la CIA en los asuntos soberanos de mi país. Ellas proporcionaron detallada evidencia de su involucramiento para impedir el triunfo electoral del presidente Allende y luego para derrocar al gobierno constitucional de Chile.

La realización de una conferencia sobre el cono sur es de gran trascendencia, pues, muy probablemente esta subregión tendrá una evolución política similar. Entre nuestros tres países —Chile, Argentina y Uruguay— existen diferencias. Sin embargo, en los últimos años ellos vivieron experiencias sorprendentemente parecidas. En los tres casos se implantaron dictaduras en el período 1973-1976; esas dictaduras se inspiraron en similares doctrinas de seguridad nacional, aplicaron iguales métodos represivos, violando los derechos de humanos más elementales, declararon la guerra a sus propios pueblos, implantaron los mismos esquemas económicos monetaristas y de libre mercado, que han conducido a la más grave crisis económica.

Así como han habido similitudes trágicas, también las hay positivas. Los procesos de redemocratización en nuestros países tendrán influencias recíprocas en el futuro próximo, a lo cual se agrega la voluntad de chilenos, argentinos y uruguayos de defender juntos la democracia. Este proceso está en pleno desarrollo.

En esta presentación sobre Chile abordaré 3 aspectos: primero, la naturaleza del momento político que vive mi país; segundo, el efecto de la política de EE UU sobre la lucha democrática chilena y, tercero, los criterios para fundar una relación más estable entre Chile y EE UU.

Situación nacional

La comprensión de la situación chilena debe partir de dos hechos centrales. El primero es que Chile tuvo hasta 1973 una de las más largas y solidas trayectorias democráticas del continente. La presente dictadura constituye la única discontinuidad histórica significativa desde la independencia. La tradición democrática chilena está viva. Existen las fuerzas nacionales para asegurar una transición a la democracia rápida y controlada, sin caos. El segundo hecho central es que el modelo económico y político impuesto por Pinochet ha fracasado irreversiblemente. Su prolongación reportará un daño aún más grave a la nación y conduciría realmente a un caos difícil de controlar.

Los derechos humanos continúan siendo violados. *Amnesty International*, *America's Watch*, la vicaría de la Solidaridad de

Economista y ex ministro de Minería en Chile durante el gobierno de Allende, militante de la IC, actualmente *fellow* del *Wilson Center* en Washington. El texto en su exposición de la conferencia sobre *US policies to accompany the transition to democracy in the southern cone* organizada por *The Washington Office on Latin America* y el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown en el Congreso de EE UU.

la Iglesia Católica en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ellas han certificado que no ha habido mejoramiento de los derechos humanos en 1982. El número de detenciones y relegaciones ha crecido, las torturas no han disminuido, las expulsiones han continuado, el exilio sigue castigando a más de 20.000 familias. En medio de una situación de deterioro y de creciente descontento, las perspectivas son de una mayor represión en 1983.

La economía chilena sufre su peor crisis y no existe solución con el esquema político vigente. En 1982 el producto nacional disminuyó en 14%, la mayor caída experimentada por un país de América Latina. El ingreso *per capita* en 1982 es inferior al de 1972. La deuda externa *per capita* es la más alta de América Latina. El desempleo es el más elevado desde 1931. Fracasado el experimento económico sólo persiste la represión.

Por lo tanto, no vivimos un progreso económico capaz de crear condiciones para una apertura a la democracia, como ocurrió en otras experiencias. Tampoco han sido incorporados nuevos sectores sociales a un mayor bienestar, lo cual hubiera permitido ampliar la base de apoyo. Por el contrario, se ha excluido políticamente y se ha pauperizado económicamente al 90% de los chilenos. El apoyo civil se ha esfumado. Pinochet se va quedando solo.

La actual Constitución es una aberración. Es tal vez la única en el mundo que menciona a un gobernante por su nombre propio. Es la única del mundo que establece explícitamente el exilio como pena impuesta arbitrariamente por el gobierno, sin recurso judicial. Chile ha vivido durante casi 10 años bajo una forma u otra de estado de sitio.

El régimen de Pinochet se ha anquilosado. El gobierno actúa defensivamente para contener los conflictos en ascenso. Su único propósito es conservar el poder y, para ello, el único

camino es atomizar la sociedad, destruir las instituciones, dejar a los individuos aislados, al arbitrio de un poder personal implacable. No habrá transición a la democracia mientras subsista el gobierno actual.

A pesar del rígido control del país por la fuerza, el descontento nacional se ha generalizado y se han extendido las expresiones de rechazo a la situación imperante. En diciembre último, la Iglesia Católica, a través de todos sus obispos, señaló la necesidad ineludible de volver a la democracia para salir de la grave crisis. En febrero de 1983, 1200 dirigentes sindicales, en carta dirigida a Pinochet, solicitaron la realización de un plebiscito para decidir si el régimen actual debe continuar o debe terminar. En marzo se gestó un amplio entendimiento político, desde conservadores hasta socialistas, en la llamada Multipartidaria. Ellos han declarado que ante la grave crisis nacional solo cabe la democracia. Ese mismo mes, el Grupo Constitucional de los 24, integrado por juristas de todas las corrientes democráticas del país, afirmó que Chile vive "la más destructora crisis de identidad nacional de que se tenga memoria".

Política de EE UU

La democracia será reconquistada por el pueblo chileno. Sin embargo, los factores externos pueden hacer esa lucha democrática más difícil o menos difícil. La política externa de EE UU en el período 1981-83 ha obstaculizado esa lucha. La actual administración ha sido un soporte del régimen de Pinochet y, por lo tanto, ha debilitado a las fuerzas democráticas.

La política de derechos humanos por EE UU en el período 1977-80 ayudó a contener la represión. La posición firme de la administración Carter en los primeros años contribuyó a la liberación de presos políticos y puso algún freno a la dictadura. En los años finales de aquella administración esa política se debilitó. Pero el balance fue positivo; los grupos oprimidos y los sectores democráticos consiguieron con ella un espacio mínimo de protección.

En 1981, la situación cambió. Los derechos humanos fueron subordinados a otros objetivos. La amistad de gobiernos dictatoriales, por declararse anticomunistas, fue considerada más importante que el respeto a los derechos humanos y la vocación democrática. La *quiet diplomacy* se aplicó cuando cabía criticar, mientras las declaraciones favorables se hacían públicas. El silencio para las críticas y la publicidad para el elogio fue interpretado por las dictaduras como un cambio a su favor. Para quienes sólo entienden el lenguaje de la fuerza, la política de la administración Reagan fue percibida como una luz verde.

La distinción entre regímenes totalitarios y autoritarios otorgó la cobertura para brindar respaldo al gobierno de Pinochet. E. Briggs, *deputy assistant secretary of State*, expresó en Santiago en julio de 1982: "*(Chile) freed itself from the marxist yoke. . . since then it has become a model of free market economics and its program to return to a real and long-lasting democracy arouses the interest and solidarity of president's Reagan administration.*"

La retórica anticomunista de las dictaduras del cono sur ha sido empleada como una cortina de humo para reprimir. El modelo de libre mercado aplicado dogmáticamente destruyó la base productiva, alentó el consumismo de una minoría y agudizó las diferencias de ingreso y riqueza. Las consecuencias han sido nefastas, pues se está empujando al país a soluciones desesperadas y se ha sembrado la inestabilidad política.

La política de EE UU hacia Chile ha sido inconsistente con

los valores democráticos que imperan en la vida interna de esta nación. Para los chilenos, la intervención en el derrocamiento del último presidente constitucional no se olvidará. El apoyo al gobierno chileno actual reafirma la percepción de que la democracia es, con frecuencia, un principio subordinado, secundario. Las posturas democráticas oficiales en EE UU se han doblegado ante los intereses económicos de algunas transnacionales, como la ITT en Chile, y han cedido ante dictaduras que se visten con una ideología conservadora y que se presentan como garantes de un orden público impuesto por el terror. Más viva es esta constatación con hechos como la reciente negación de una visa para ingresar a EE UU por unos días a la esposa del presidente Allende, mientras meses antes la esposa del general Pinochet era acogida en la Casa Blanca.

Se debe reconocer que en el último tiempo ha habido una posición más clara del Departamento de Estado en materia de derechos humanos en Chile. Sin embargo, esas indicaciones no ganan relevancia en un contexto general dominado por una actitud favorable a un régimen no democrático y represivo.

Luchas por la democracia

La existencia de una política democrática consiste en la mejor garantía de una relación más sólida entre Chile y EE UU. Una relación estable entre los pueblos debe fundarse en el respeto permanente de dos valores básicos: los derechos humanos y la democracia.

Con respecto a los derechos humanos su defensa debe ser clara y explícita. Esa defensa debe traducirse en el fortalecimiento de los organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el respaldo a los órganos no gubernamentales dedicados a la misma misión. Una nueva política debe partir de la noción que los derechos humanos básicos son supranacionales. Ningún gobierno puede alegar, en consecuencia, que la muerte, el desaparecimiento, la tortura y el exilio de los ciudadanos del país son cuestiones que no conciernen a otras personas, instituciones o gobiernos. Esto es aun más evidente cuando el país en cuestión es signatario de acuerdos internacionales que lo comprometen a respetar los derechos básicos de la persona.

En cuanto a la democracia, ella no se exporta ni se impone, es un proceso propio de cada pueblo. Pero puede ser obstaculizada desde el exterior. Para respetar el principio de no intervención, una política consistente debe poner el acento en lo que EE UU no debe hacer: no debe apoyar a las dictaduras. El esfuerzo común debe concentrarse en suprimir las políticas que obstruyen la redemocratización más que en la promoción directa de la democracia. Porque un intento mal concebido de respaldar determinadas políticas desde afuera conduciría inevitablemente a otras formas de intervención. En suma, defender abiertamente los derechos humanos y no apoyar a las dictaduras favorecería el desarrollo de las fuerzas democráticas nacionales y el fortalecimiento de las instituciones.

Esa política contribuiría a crear una auténtica estabilidad en el continente americano basada en el consenso y no en un *statu quo* impuesto por la fuerza.

La democracia en Chile volverá. El régimen actual no tiene destino. Nuestra tarea es acortar el tiempo para evitar más dolor y miseria. Luchar por la democracia en el cono sur es también luchar por su fortalecimiento en todos los países del continente. Es, por lo tanto, una tarea de todos los americanos comprometidos con la democracia.

Centroamérica

La inútil guerra de Reagan

Ximena Ortúzar

“EE UU, el país más poderoso del mundo, nos ha declarado la guerra y esto es, realmente, casi un elogio para nosotros.”

Lo anterior fue declarado por Tomás Borge, comandante de la revolución y ministro del Interior de Nicaragua, en alusión a la campaña desestabilizadora desatada por la administración de Ronald Reagan contra el gobierno sandinista.

Hablar de una guerra de EE UU contra Nicaragua no es una forma metafórica de definir la situación actual entre ambos países. Es una afirmación que comprueba día a día las agresiones militares, económicas y propagandísticas apoyadas por el gobierno de Washington y dirigidas contra Nicaragua.

Si bien los objetivos intervencionistas de Reagan comprenden a toda Centroamérica, a la que define como “reserva estratégica y cuarta frontera de EE UU”, tras el triunfo revolucionario sandinista de julio de 1979, Nicaragua se ha convertido en la piedra en el zapato. Para revertir la situación, el gobierno estadounidense instruye, arma y financia a la contrarrevolución, utilizando el territorio de Honduras y el de Costa Rica, y aumenta el apoyo militar a El Salvador, donde el avance de la lucha revolucionaria hace tambalear al gobierno de Alvaro Magaña.

El discurso de Reagan del 27 de abril pasado ante las dos cámaras tuvo precisamente como objetivo reforzar las acciones de EE UU en Centroamérica, para lo cual pidió un aumento de 600 millones de dólares para países “amigos”. Su argumento central fue el peligro del futuro de la democracia en el hemisferio y la paz e integridad del territorio estadounidense.

Posteriormente, en conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, Reagan lamentó que la cláusula que obliga a utilizar la ayuda a países centroamericanos en forma abierta esté limitando su posibilidad de combatir “la ayuda que los sandinistas prestan a los guerrilleros salvadoreños”. Negó que su administración tenga el propósito de derrocar al gobierno de Managua y, a renglón seguido, explicó que ayuda a los “soldados de la libertad” de la contrarrevolución porque éstos “luchan por los principios revolucionarios que los sandinistas han traicionado”, dando a entender que él, precisamente él, es un defensor celoso de los principios revolucionarios y sandinistas. . .

En el terreno económico, el nada original bloqueo comienza a hacerse sentir. La supresión repentina del 90 por ciento de la cuota azucarera nicaragüense destinada a EE UU, lo que equivale a 52 mil 800 toneladas cortas, decidida por Washington, demuestra que todo es válido en la mente del mandatario del país más poderoso del mundo.

En el plano propagandístico, se da a entender que los conflictos que enfrenta Centroamérica se inscriben en la confrontación Este-Oeste y que en Nicaragua hay una guerra civil. Se trata de preparar a la opinión pública para una posible intervención de EE UU en la zona, medida que no ha sido descartada aunque por ahora, época preeleccionaria, es más conveniente realizar una intervención con mano mora. Y para tal objetivo, Honduras es el “amigo” indicado.

Honduras: cuartel general somocista

Además de ser país limítrofe con Nicaragua, Honduras debe “favores” a EE UU y todo esto lo convierte en el país ideal para organizar la agresión armada contra el proceso sandinista.

Veamos cuáles son los favores que el gobierno encabezado por Roberto Suazo Córdoba está retribuyendo:

—antes del triunfo de la revolución sandinista, el número de efectivos del ejército hondureño era de 14 mil 200; hoy son 21 mil 400. En los últimos tres años, las bases militares hondureñas han aumentado en un 50 por ciento, en tanto que se duplicó el número de bases navales, pistas para aterrizajes militares y aviones de combate. En cuanto a los helicópteros, que eran siete en 1979, hoy son 21, es decir, se triplicaron.

—la ayuda militar que en 1980 fue de tres millones de dólares, en 1982 fue de 10.6 millones, además de 21 millones adicionales para modernización de aeropuertos militares ya existentes.

—todo lo anterior ha significado un notorio incremento en la capacidad militar del ejército hondureño y eso tiene un precio. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Gustavo Alvarez Martínez, declaró en entrevista difundida por Radio América que su gobierno está de acuerdo en que EE UU intervenga militarmente en Centroamérica. En respuesta, Ronald Reagan calificó a Alvarez como “valioso y buen amigo” y envió otros 97 consejeros militares a Honduras, a la vez que aprobó la instalación de la base Fort Mocerón en la zona fronteriza.

—Honduras cuenta, además, con una flamante escuela de entrenamiento antiguerrillas y con la primera base militar estadounidense en su territorio, instalada por los “boinas verdes” en junio pasado.

Veamos ahora cómo retribuye los favores:

—la franja fronteriza está poblada de campamentos somocistas. En ellos, asesores militares estadounidenses entrenan a soldados de la abolida Guardia Nacional somocista, entre los que se cuentan varios oficiales; mercenarios contratados *ex profeso* e incluso soldados regulares hondureños.

También en la franja fronteriza se instalaron sofisticados equipos electrónicos de radiocaptación, audición de conversaciones telefónicas y observación por radar de los desplazamientos de las tropas del Ejército Popular Sandinista.

En Puerto Lempira, a escasos 15 kilómetros de Nicaragua, se realizan acciones conjuntas de EE UU y Honduras en las que participan 900 asesores militares y mil 600 efectivos de la aviación y el ejército estadounidense.

La revista *Time* del 4 de abril pasado, afirmó que el cerebro que dirige las actividades militares desde Honduras y contra Nicaragua, está integrado en su totalidad por ciudadanos estadounidenses, expertos de la CIA, bajo las órdenes del embajador de EE UU en Tegucigalpa, John Negroponte, veterano de la conducción de la guerra de Viet Nam. Integran también ese estado mayor de la contrarrevolución representantes del comando sur de EE UU en Panamá, un grupo de altos oficiales hondureños y, por cierto, ex oficiales de la Guardia Nacional, agrega el semanario.

Las agresiones armadas y los intentos de invasión de territorio de Nicaragua se han venido registrando a partir de agosto de 1982, especialmente en el tramo comprendido entre los cerros La Fila y El Castillo, en el sector de Jalapa, Departamento de Nueva Segovia, en el noreste de Nicaragua. También han atacado, en menor proporción, en los Departamentos de Madriz y Chinandega.

También se sabe que desde aviones de la Fuerza Aérea de Honduras se ha entregado pertrechos y provisiones a contrarrevolucionarios infiltrados en territorio nicaragüense.

La contrarrevolución utiliza artillería pesada (morteros de 106.7 milímetros y 120 milímetros), causando bajas entre la población civil de poblados fronterizos. Sólo en la última semana de marzo, esas bajas alcanzaron a 27 personas muertas, incluyendo entre ellas al médico francés Pierre Grosjean, que realizaba una investigación acerca de la lepra de montaña en un caserío cercano a Waslala.

También desde Costa Rica

En abril pasado se registraron agresiones por la frontera sur de Nicaragua, concretamente en los puestos fronterizos La Esperanza y Fátima, en el Departamento de San Juan. Estas acciones corresponden a cuatro organizaciones agrupadas en la autodenominada Alianza Revolucionaria Democrática, ARDE, que encabeza Edén Pastora y que opera principalmente en Costa Rica.

La organización de la contrarrevolución en territorio de Costa Rica data de varios meses. Al respecto, son ilustrativas las declaraciones del ex oficial de inteligencia argentino, Héctor Frances, ante la prensa internacional de México en diciembre de 1982. Frances informó detalladamente acerca de actividades que, con apoyo de la CIA, se han venido desarrollando en territorio costarricense desde el año pasado, especialmente en el sentido de reclutar "voluntarios", incluso mediante el secuestro. Frances agregó que la contrarrevolución cuenta con asesores militares argentinos.

Por otra parte, desde hace dos meses un contingente de *marines* estadounidenses, conocidos como "sea bees" (abejas

marinas), se encuentra en territorio costarricense, concretamente en la provincia de Guanacaste. Estos *marines* pertenecen a la base naval Gulfport, ubicada frente al golfo de México, y fueron trasladados a Costa Rica para apoyar "actividades agrícolas" en la citada provincia, a petición del gobierno de San José.

Así, Costa Rica parece ser en estos momentos una segunda base política y potencial centro de agresiones militares contra Nicaragua, con anuencia de sectores del gobierno de Luis Alberto Monge.

Todo demuestra que el plan de Reagan para derrocar al gobierno sandinista está bien trazado. Incluso se han dado fechas para lograrlo: fines de 1983. Sus asesores se encargan de hacer declaraciones complementarias. A su regreso de una gira por nueve países centro y sudamericanos, el embajador itinerante de EE UU para Centroamérica, Richard Stone, declaró en México que "en esa zona existe un eje extranjero que amenaza la paz y la seguridad regional", y agregó "es necesario poner atajo a las acciones insurgentes de izquierdistas extremistas y fanáticos", para lo cual señaló como líder al presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt, que "se ha destacado por su avance en el mejoramiento de los derechos humanos en su país".

Un día después de las declaraciones de Stone, un alto funcionario de la Casa Blanca declaró a la prensa que "EE UU estaría dispuesto a reconocer como legítimo un gobierno antisandinista si los rebeldes logran el control de un centro urbano importante en Nicaragua".

Todo confirma la acusación hecha el 29 de marzo por un editorial de *New York Times*, que decía: "El gobierno de EE UU está librando una guerra contra Nicaragua, aunque el Congreso norteamericano no ha declarado tal guerra. La Constitución confiere ese poder al Congreso de la Unión Americana, pero alguien ha usurpado ese poder: la Agencia Central de Inteligencia comandada por el presidente Reagan."

Las cartas están sobre la mesa.

Paz con dignidad

¿Cómo responde Nicaragua?

En primer lugar, hay que recordar que el Ejército Popular Sandinista cuenta con 120 mil efectivos regulares. A esa fuerza militar hay que sumar la de 80 mil milicianos. Además, y de eso hubo pruebas contundentes durante la insurrección final que derrocó a Anastasio Somoza y la muy bien entrenada y armada Guardia Nacional, la población civil apoya al Frente Sandinista de Liberación Nacional, hoy conductor del proceso revolucionario, y está dispuesta a sumarse, una vez más, a las fuerzas de combate.

Todo el país está en estado de alerta. La prueba es que, hasta ahora, la contrarrevolución ha sufrido muchas más bajas que el Ejército Popular Sandinista, tanto en vidas como en armamentos. Todos los intentos de invasión, por ambas fronteras, han fracasado rotundamente.

La consigna de *Patria libre o morir* es un principio irrenunciable para los nicaragüenses.

Pero, sin duda, la mejor respuesta puede encontrarse en las declaraciones del comandante Borge:

"Este es un pueblo que ama la paz. El gobierno surgido de la revolución sandinista también tiene vocación pacifista y hemos dado pruebas de ello al agotar las gestiones encaminadas a una solución pacífica para Nicaragua y para Centroamérica. Hemos apoyado la gestión de los cancilleres del Grupo Conta-

El Papa en Nicaragua

“¡Queremos la paz!”

Roberto Pizarro

Nunca antes se había visto algo igual. El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica diciendo la misa a campo abierto, en la plaza principal de Managua —la plaza 19 de Julio— y cientos de miles de sus fieles pidiéndole, llorándole, gritándole que orara por la paz. La historia de América Latina seguía haciéndose en Nicaragua.

El silencio y la expectación marcaron los primeros momentos, con la entrada del Papa a la plaza. Este, en un blanco y oro impecable, lucía majestuosamente ante la masa de hombres, mujeres y niños enrojecidos por un fuerte sol y con sus ropas sucias de polvo. Las largas caminatas de los habitantes de Managua y de los departamentos del interior no disminuyeron el entusiasmo por ver y escuchar al príncipe de la Iglesia. ¡Viva el Papa!, ¡viva el Papa! fueron los primeros gritos de saludo de un pueblo que reconoce en Su Santidad al representante de Cristo en la Tierra. Nadie imaginaba, en esos momentos de felicidad, que minutos más tarde se abriría un abismo entre el jefe de la Iglesia y los católicos de Nicaragua.

La homilía comenzó con un saludo efusivo al arzobispo Obando y Bravo y a los obispos de Nicaragua. El Papa señaló la absoluta obediencia y sumisión que los católicos deben profesar a la autoridad eclesiástica, condición indispensable de la unidad de la Iglesia. Predicó sobre la inconveniencia o, más bien, el impedimento de trasladar la fe a opciones terrenales político-sociales y el rechazo más rotundo a interpretaciones del evangelio que se aparten de las oficiales. La misa se alargaba en conceptos abstractos, comprensibles para expertos en teología, ajenos a los dolores que viene sufriendo el pueblo nicaragüense con la muerte de sus hijos más queridos.

Juan Pablo II continuaba y el nerviosismo del pueblo crecía al no escuchar de parte del Papa palabra alguna referente a la paz, a los caídos, a los mártires de ayer y de hoy. El día anterior, en la misma plaza 19 de Julio, se

había rendido un homenaje póstumo a 17 jóvenes asesinados en la frontera norte por las bandas somocistas. Las madres de éstos jóvenes, vestidas de luto, se encontraban en la primera fila de la multitud, esperando la palabra de Juan Pablo II. Imposible no verlas, con el retrato de sus hijos en el pecho.

El pueblo católico no estaba satisfecho. Las aspiraciones previas a la visita papal no se cumplían. Allí comenzaron los primeros gritos, en el medio de la misa, suavemente al comienzo, con miedo, con temor a herir la autoridad papal. ¡Queremos la paz!, ¡queremos la paz! eran gritos de diálogo, que intentaban hacer comprender a Juan Pablo II que había algún error de su parte, que la información que se le había entregado no correspondía a las realidades de Nicaragua, que se encontraba ante un pueblo agredido y martirizado. No obstante, el Papa continuaba concentrado en la lectura de un texto preparado con anterioridad y hacía caso omiso a la petición popular por incorporar en su intervención palabras de paz.

A partir de ese momento, los peregrinos no se contuvieron y toda su perplejidad, frustración y desesperación se convirtió en un solo grito atronador que estremeció la plaza y sus alrededores: ¡Queremos la paz!, ¡queremos la paz! El Papa respondió, pero respondió mal. Con un rostro descompuesto el Santo Padre gritó: ¡Silencio!, intentando acallar aquellas voces que le demandaban se apartara de un texto que no incorporaba los ruegos del pueblo católico. Las consignas se multiplicaron: ¡Entre cristianismo y revolución, no hay contradicción!; ¡Queremos una Iglesia para los pobres!; ¡Hasta llegar al poder popular!; ¡Poder popular! En medio de estos gritos, las madres de los 17 jóvenes martirizados lloraban al Papa para que orara por sus hijos.

La misa terminó con un manifiesto enojo papal y con una profunda pena de la gran masa popular. Las demandas populares no fueron satisfechas. No se escuchó una palabra de compasión para los pobres de Nicaragua y toda la genero-

sidad y apoyo de Juan Pablo II pareció dirigida al arzobispo y a la institucionalidad de la Iglesia. El Concilio Vaticano II y Medellín se habían olvidado.

El pueblo de Nicaragua, con esa misma espontaneidad que lo ha caracterizado en sus luchas sociales, alzaba su voz, esta vez, ante una homilía que nada tenía que ver con sus reales preocupaciones cotidianas, ni con sus íntimos pensamientos como cristianos. Qué dolor habrán sentido aquellas madres a las que se les negaba una oración por sus hijos asesinados. Qué contradicción habrán experimentado aquellos campesinos y obreros a quienes se les rechazaba una palabra en favor de la paz.

Después de la visita papal no vino la calma. Algunos manifiestan su indignación ante una supuesta falta de respeto a la autoridad eclesiástica y la solemnidad de la misa. El comandante Daniel Ortega dio respuesta a esas personas en el discurso de despedida a Su Santidad:

“Cuando nuestro pueblo dice ‘Queremos la paz’ lo hace presionado por una situación de dolor, de llanto, de martirología permanente. Nuestro pueblo es crucificado todos los días y demanda solidaridad, reclama solidaridad.”

Por otra parte, la mayoría católica se sobrepone a la tremenda contradicción que vivió en la plaza. La lucha entre la sumisión a la autoridad y la reacción ante el dedo acusador y la falta de compasión todavía los estremece. Sin embargo, lo que queda, en última instancia, es la fuerza del pueblo católico de Nicaragua, su valentía moral para hacer valer lo que es justo por sobre la institucionalidad de la Iglesia.

En medio de estos debates el pueblo de Nicaragua se prepara para nuevas jornadas, mientras la contrarrevolución afila sus dientes envalentonada con los anuncios de Reagan, de mayores financiamientos para sostener la agresión en contra del pueblo salvadoreño. Juan Pablo II, en la tranquilidad del Vaticano, reflexionará sobre su homilía en Nicaragua y, seguramente, logrará entender el por qué de aquellos gritos de *queremos la paz, queremos la paz.* ❧

dora porque pensamos que se trata de un intento serio, honesto y razonable para lograr esa paz que deseamos y propiciamos. Hemos utilizado, y lo seguiremos haciendo, todos los foros internacionales adecuados para expresar nuestra decisión de alcanzar la paz. Sin embargo, querer la paz no significa renunciar a nuestro legítimo derecho a la defensa. Y la mejor forma que tiene este pueblo agredido para garantizar la paz, es empuñar los fusiles libertarios de la paz digna. Porque este pueblo no puede concebir una paz sin dignidad. La paz es tan necesaria como el pan nuestro de cada día, es como el aire que respiramos. . . Pero no queremos cualquier paz. Queremos una paz de frente despejada y de alegría en el corazón. Y si este pueblo se desangró por alcanzar su libertad, EE UU debe estar advertido de que los nicaragüenses sabremos defenderla hasta las últimas consecuencias. Porque no hay paz sin libertad y porque este pueblo ya no entiende otra libertad que la que emana de las clases populares. ¡Y esa libertad la vamos a defender a cañonazos!”

“Si Nicaragua venció El Salvador ‘vencerá’”

Esta consigna, generalizada en ambos países, preocupa a la administración Reagan de manera especial. . . y justificada. Un pueblo en armas ha tomado la delantera en la escena salvadoreña y día a día pone en jaque al ya deteriorado y desmoralizado ejército.

La ayuda estadounidense al gobierno de Alvaro Magaña no se ha hecho esperar. Sólo entre enero de 1982 y junio de este año, EE UU entregó mil millones de pesos, además de 60 millones como partida especial, sacados en mayo pasado de un fondo de emergencia del Pentágono. Ayuda generosa e inútil.

Si 40 mil muertos no han podido detener el avance de las fuerzas revolucionarias. . . ¿podrán los dólares?

La vanguardia popular salvadoreña, FMLN-FDR (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario) ha expresado reiteradamente su disposición a un diálogo. El gobierno de Magaña, vocero del Departamento de Estado norteamericano, ha respondido con la represión, también inútil.

Desde su primera ofensiva importante, en enero de 1981, el FMLN ha crecido en cantidad y en calidad. Dos años y medio de experiencia, de maduración, lo han convertido no en una organización de milicianos, sino en un ejército convencional fuerte y creciente.

Esa primera ofensiva, iniciada el 10 de enero de 1981 con el ataque coordinado a diversos cuarteles, no tenía por objetivo derrotar militarmente al enemigo, según han explicado altos mandos del FMLN, sino desatar la insurrección generalizada de las masas. Y si bien no alcanzó ese objetivo, constituyó su carta de presentación formal tanto dentro como fuera del país y el punto de partida para una serie de operativos que en este momento arrojan un saldo positivo para las fuerzas populares.

Tal vez el error de la primera ofensiva haya consistido en su carácter extemporáneo. Un año antes la insubordinación popular generalizada habría sido posible sin siquiera recurrir a acciones armadas, pero sí con una clara conducción de vanguardia. Y no la hubo. Porque en 1979 y 1980, sobre todo después del asesinato del arzobispo Romero, la disconformidad popular contra el régimen de José Napoleón Duarte había alcanzado su punto culminante. Faltó entonces coordinación y, tras la ola de protestas mayoritarias pero desorganizadas, el ejército desató una campaña de terror sistemático, especial-

mente en el campo y en los centros urbanos donde la conciencia antigubernamental se hallaba más avanzada.

En cambio, tras la ofensiva de enero, que en este caso no contó con el auge popular de etapas anteriores, el ejército se concentró en los cuarteles. El FMLN, por su parte, se replegó al campo y comenzó a consolidar su retaguardia, a la vez que reclutaba combatientes y adquiría pertrechos.

En enero de 1982, en época preeleccionaria, bajo estado de sitio, la guerrilla realiza un operativo en la base aérea de Ilopango y destruye el 70 por ciento de los aparatos de la aviación salvadoreña. En marzo logra sitiar Usulután y sólo el envío de muy cuantiosos refuerzos militares por parte del ejército impide que los guerrilleros tomen el cuartel central de esa ciudad. También en marzo concentran su accionar en las principales ciudades, incluyendo la capital. El día de los comicios atacan incluso el palacio de gobierno, pero no logran mantener su capacidad de fuego y se repliegan nuevamente al campo.

Como resultado de las elecciones, el ex mayor Roberto D'Aubuisson, del ultraderechista movimiento Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en su calidad de presidente de la Asamblea Constituyente, designa como presidente de la república al banquero Alvaro Magaña. El gobierno instaurado por medio de esas elecciones tiene carácter de “provisional”.

En junio de 1982 el FMLN inicia una nueva ofensiva general. Se trata, ahora sí de derrotar militarmente al enemigo y para ello decide adoptar la táctica de guerra de movimiento. A partir de entonces comienza a vislumbrarse la derrota del ejército salvadoreño y el auge del proceso revolucionario.

Primera gran victoria

Una guerra de movimiento implica pasar de la dispersión a la concentración de fuerzas. Y el FMLN se concentra en Morazán. Para obligar al enemigo a dispersarse, los guerrilleros cercan Perquín; no contemplan mantenerlo, sino cercar a los efectivos que llegarán como refuerzos. En efecto, 250 de ellos se reúnen en el poblado contiguo de San Fernando. Al comprobar la capacidad militar de la guerrilla, solicitan tres compañías más, las cuales son detectadas, cercadas y derrotadas por el FMLN.

El sitio de San Fernando permite a las fuerzas revolucionarias tomar 43 prisioneros, entre ellos el viceministro de Defensa, coronel Adolfo Castillo; causar 80 bajas al ejército, entre cuyos muertos se cuenta el coronel Beltrán Lima, comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Morazán, e incautar 170 fusiles y 12 piezas de artillería ligera, además de millares de cartuchos.

Esta fue, sin duda, la primera gran victoria militar de la guerrilla salvadoreña. Consciente de su derrota, el ejército desplaza seis mil hombres a Morazán, pero no logra detener el avance guerrillero y, en cambio, pierde el Batallón Belloso, entrenado por EE UU y altamente eficiente en contrainsurgencia.

El FMLN pone en práctica entonces un plan de sabotaje generalizado contra las vías de comunicación, obligando al ejército a desplazarse en patrullas poco numerosas, lo cual lo hace más vulnerable a los ataques guerrilleros. La modalidad de una guerra de movimiento no estaba contemplada en los esquemas del ejército salvadoreño y los efectos negativos que esto le produce son evidentes. En esa etapa pierde alrededor de 3 mil efectivos. El FMLN, por su parte, disminuye el número de bajas en sus filas y recupera gran cantidad de armamentos.

La ofensiva de octubre pasado da al contingente popular nuevas e importantes victorias tanto en el plano del aniquilamiento estratégico del enemigo en diversos puntos del país, como en la desestabilización del gobierno por medio del sabotaje organizado.

El régimen de Magaña intenta diversas fórmulas de sobrevivencia. Una de ellas es la firma del Pacto de Apaneca, en agosto pasado, entre ARENA, la Democracia Cristiana, Conciliación Nacional y el Partido Popular Salvadoreño. Este pacto fue visto con beneplácito por EE UU sobre todo porque habla de promover instituciones democráticas. También contó con la aprobación de D'Aubuisson, jefe de los escuadrones de la muerte, y del entonces ministro de la defensa de El Salvador, general José Guillermo García, responsable de 13 mil 500 muertes. Es fácil entender a qué democracia se refiere dicho pacto.

También se ha acordado adelantar las elecciones de marzo de 1984 a diciembre de 1983, pero no se ha mencionado de qué manera se garantizará la legitimidad de esos comicios ni qué garantías tendrá el pueblo salvadoreño para emitir libremente su voto. Es claro, y así lo ha declarado el FDR, que esta maniobra es sólo un burdo intento de mediatización ante la creciente agudización de contradicciones que enfrenta el gobierno de Magaña, que en mayo pasado hizo reemplazar a García en la cartera de Defensa por Carlos Eugenio Vides Casanova, en un simulacro de buena disposición por mejorar los derechos humanos.

A todo lo anterior se suma una grave crisis económica, iniciada en 1979 y agudizada en 1982, lapso en que la fuga de capitales hacia Estados Unidos ha sido de 500 millones de dólares. La deuda externa es de mil 600 millones de dólares y el déficit de la balanza de pagos es de 132 millones. El brusco descenso de la producción de café y algodón (puntales de la economía salvadoreña) ha producido una disminución dramática del producto interno bruto y una galopante inflación.

Sin embargo, el monto por pago de salarios a los militares ascendió, sólo en el primer semestre de 1982, a 120 millones de dólares y el costo por operativos militares en igual lapso fue de 114 millones. Es decir, en plena crisis, se destinó a la defensa un total de 234 millones de dólares, de un presupuesto nacional de 845 millones.

En cuanto a los derechos humanos, que según Reagan y su embajador Stone "han mejorado", hablan por sí solas las cifras publicadas a diario por los periódicos.

A diferencia de Nicaragua, que durante su guerra de liberación contó con una frontera neutral, El Salvador limita con países que responden incondicionalmente a los dictados del Departamento de Estado norteamericano. Pese a todo, las fuerzas revolucionarias avanzan seguras hacia la victoria. Prueba de ello es que el ejército ha debido ceder terreno y esto, es un país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y con una población de dos y medio millones de habitantes, es grave. En El Salvador, perder terreno significa perder la guerra.

Guatemala, enclave de EE UU

Guatemala, el país con mayores recursos naturales del área centroamericana, de más vasto territorio y con mayor población, despierta también la voracidad de EE UU.

Rico en níquel y en petróleo (en la zona norte, limítrofe con México, se encuentran los mayores yacimientos petrolíferos, considerados como la principal reserva de EE UU en el hemisferio), con un importante desarrollo industrial, con

hidroeléctricas avanzadas, eje del Mercomún Centroamericano, con 108 mil 886 kilómetros cuadrados, una población cercana a los siete millones de habitantes y frontera con tres países de Centroamérica y con México, Guatemala, prácticamente intervenida desde 1954, tiene características de un enclave estadounidense en la región.

Las inversiones extranjeras en el país alcanzan a 926 millones de dólares. Operan allí 125 corporaciones transnacionales, 77 de las cuales corresponden a las más poderosas del mundo y otras 31 son consideradas "gigantes" en el contexto mundial.

La oligarquía financiera nacional es tan poderosa y tan entreguista, que durante la campaña de Ronald Reagan hizo un importante aporte para asegurar el triunfo del actual mandatario estadounidense, hecho sin precedentes en la historia de los países dependientes y subdesarrollados.

Pero también es en Guatemala donde se da, por primera vez en la historia de América Latina, un fuerte movimiento indígena revolucionario cuya estrategia es la toma del poder.

En la actualidad, las fuerzas revolucionarias (Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP; Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR; Organización del Pueblo en Armas, ORPA; y Partido Guatemalteco de los Trabajadores, PGT) se agrupan en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG y libran permanentes combates contra el ejército, de cuyas acciones represivas da cuenta el número de víctimas registradas sólo en 1981, que fue de 13 mil 700 personas.

A su vez, la guerrilla ha asestado duros golpes al aparato militar: entre enero y mayo de 1982, se registraron mil 43 operativos armados con un saldo de 801 efectivos muertos y la pérdida de 102 armas.

Para reprimir al pueblo guatemalteco, los sucesivos gobiernos militares de ese país han contado con ayuda de EE UU e Israel. La ayuda de Washington ha sido generosa: entre 1962 y 1979, Guatemala recibió 404 millones de dólares por concepto de ayuda militar (aunados a 391 millones de ayuda económica y 571 millones en empréstitos a instituciones financieras internacionales que operan en el país). Actualmente, la ayuda militar se extiende a entrenamiento de efectivos militares y se acaban de otorgar 3.7 millones de dólares extra para repuestos de helicópteros, 50 millones para "desarrollo de áreas rurales" (precisamente para aquellas donde el exterminio de indígenas es más evidente), 10 millones de dólares otorgados por el Congreso de EE UU como partida especial a pedido de Reagan y 170 millones entregados por el BID y el Banco Mundial.

Israel, a su vez, colabora con Guatemala desde 1976, tanto en armamentos como en asesoría militar. Guatemala es el primer comprador centroamericano de armas israelíes. El 30 por ciento de las metralletas y fusiles ametralladoras que adquiere se destina a ventas a países vecinos de Centroamérica.

En cuanto a la asesoría militar israelí, ésta se concentra en el entrenamiento de "kaibiles", soldados especializados en contrainsurgencia y que operan especialmente en zonas rurales indígenas. Los "kaibiles", a quienes también entrenan expertos chilenos, según declaró el desertor Anastasio Tuc Umán, beben la sangre de los indígenas que asesinan, y lo hacen frente a los prisioneros. Así lo indica el entrenamiento. Esto tiene como objetivo que los indígenas los "respeten", explicó Tuc Umán y agregó "les hacemos creer que al tener sangre india dentro de nuestro cuerpo, atacarnos es un pecado contra su raza"

(Termina en la pág. 70)